

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO  
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA  
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN**

**CENTRO DE PERIODISMO  
INVESTIGATIVO, INC.**

Peticionario

v.

**ROSANA AGUILAR ZAPATA, en su  
capacidad oficial como Directora  
Ejecutiva de la AUTORIDAD DE  
CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN DE  
PUERTO RICO**

Promovida

**Civil Núm.:**

**Sala:**

**Sobre:** *Mandamus*; acceso a  
la información

**PETICIÓN DE MANDAMUS**

**AL TRIBUNAL:**

**COMPARECE** la parte peticionaria, **Centro de Periodismo Investigativo, Inc.**, por conducto de la representación legal que suscribe y **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

**I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL**

1.1. La Sala Superior de San Juan del Tribunal de Primera Instancia es la sala con jurisdicción y competencia para entender en el caso de epígrafe en virtud de los Artículos 5.001, 5.003 y 5.005 de la Ley de la judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 LPRA §§ 25a, 25c, 25e (2018), los Artículos 649 al 661 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA §§ 3421-3433 (2018), y las Reglas 3.3 y 54 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, RR. 3.3, 54 (2018), toda vez que los hechos objeto de la presente petición ocurrieron en la jurisdicción de San Juan, Puerto Rico.<sup>1</sup>

**II. LAS PARTES**

2.1. La peticionaria, **CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO, INC.** (en adelante, CPI), es una corporación sin fines de lucro debidamente

<sup>1</sup> Aunque la Ley de transparencia y procedimiento expedito para el acceso a la información pública, Ley Núm. 141-2019, crea un recurso especial para casos de acceso a la información, el Artículo 12 de la medida dispone que “[l]a enumeración de derechos que antecede no se entenderá de forma restrictiva, ni supone la exclusión de otros derechos y procedimientos pertenecientes a las personas solicitantes de información pública y no mencionados específicamente como lo es el recurso de *mandamus* tradicional”.

organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Su Directora Ejecutiva es la periodista Sa. Carla Minet Santos Santiago (en adelante, Santos Santiago). Su dirección es: PO Box 6834, San Juan, Puerto Rico 00914-6834. Su teléfono es el (787) 751-1912, ext. 3022.

2.2. El CPI se dedica, entre otras cosas, a la realización de investigaciones periodísticas y a la publicación de reportajes producto de tales investigaciones. Su página web es: <http://periodismoinvestigativo.com/> (última visita el 30 de enero de 2020).

2.3. **ROSANA AGUILAR ZAPATA** (en adelante, Aguilar Zapata) es la **DIRECTORA EJECUTIVA** de la **AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN DE PUERTO RICO** (en adelante, ACT). La ACT fue creada en virtud de la Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, Ley Núm. 74 del 23 de junio de 1965, 9 LPRA §§ 2001-2035 (2018). La ACT está adscrita al Departamento de Transportación y Obras Públicas (en adelante, DTOP), 3 LPRA Ap. III, § V (2018), y es una “corporación pública e instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” y cuenta con capacidad jurídica para demandar y ser demandada a su nombre. 9 LPRA §§ 2002, 2004 (2018). La dirección física de la ACT es: Centro Gubernamental Minillas, Edif. Sur, Piso 10 Santurce, Puerto Rico. Su dirección postal es: Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella, PO Box 42007, San Juan, PR 00940-2007. Su teléfono es el (787) 721-8787.

### III. LOS HECHOS

3.1. Según su ley habilitadora, la ACT está facultada para “[t]ener completo control y supervisión sobre cualesquiera facilidades de tránsito o de transportación poseídas, operadas, construidas o adquiridas por ella bajo las disposiciones de este capítulo, incluyendo, sin limitación, la determinación del sitio, localización y el establecimiento, límite y control de los puntos de ingreso y egreso de tales facilidades, y los materiales de construcción y la construcción, mantenimiento, reparación y operación de las mismas”. 9 LPRA § 2004 (2018).

- 3.2. Además, la ACT está facultada para “[c]onstruir o reconstruir cualquier facilidad de tránsito o de transportación o parte o partes de ésta y cualesquiera adiciones, mejoras o ampliaciones a cualquier facilidad de tránsito o de transportación de la Autoridad”. *Id.*
- 3.3. El 4 de septiembre de 2019, el periodista Rafael R. Díaz Torres, en representación del CPI, realizó una llamada a la Sa. Ivonne Rosario, Directora de Comunicaciones y Prensa de la ACT, mediante la cual solicitó copia del inventario de carreteras y puentes vulnerables al paso de ciclones o eventos atmosféricos extraordinarios. La Sa. Rosario no se encontraba en la oficina, por lo que se le dejó un mensaje solicitando la información con la Sa. Maritza Green. *Véase Declaración Jurada del Sr. Díaz Torres.*
- 3.4. Luego de dar seguimiento a la llamada inicial, el 6 de septiembre de 2019, el Sr. Díaz Torres se comunicó nuevamente con la Sa. Green, quien le manifestó que la Sa. Rosario conocía ya de la solicitud de información, que se estaba trabajando y que se comunicaría tan pronto tuviera una respuesta. *Véase Declaración Jurada del Sr. Díaz Torres.*
- 3.5. El 9 de septiembre de 2019, la Sa. Rosario se comunicó por teléfono con el Sr. Díaz Torres. Le indicó que conocía de su petición, pero, luego de aclarar algunas dudas sobre la misma, solicitó al Sr. Díaz Torres que le enviara las preguntas y la petición por escrito. Así lo hizo el Sr. Díaz Torres al día siguiente. **Anejos 1. Véase también Declaración Jurada del Sr. Díaz Torres.**
- 3.6. El 11 de septiembre de 2019, la Sa. Rosario se comunicó con el Sr. Díaz Torres para convocarle a una reunión con personal de la ACT el jueves 12 a la 1:00 p.m. para discutir la petición de información. *Véase Declaración Jurada del Sr. Díaz Torres.*
- 3.7. El 12 de septiembre de 2019, se llevó a cabo la referida reunión en las oficinas del DTOP, en el Piso 17 del Centro Gubernamental Minillas, en Santurce. En la misma participaron el Sr. Díaz Torres, por el CPI, el Ing. Miguel Pellot, Jefe de Ingeniería del DTOP, el Ing. Manuel Coll, Jefe de Gerencia de

Inventario de Puentes de ACT, la Sa. Rosario, y otra persona que se presentó como Asesor de Comunicaciones. La conversación fue grabada por el Sr. Díaz Torres. *Véase **Declaración Jurada del Sr. Díaz Torres.***

3.8. Durante la reunión, el ingeniero Coll indicó que la ACT no cuenta con un inventario sobre puentes vulnerables a eventos atmosféricos intensos. Sin embargo, indicó que existe una lista de puentes vulnerables a socavación, además de un inventario de todos los puentes en Puerto Rico. *Véase **Declaración Jurada del Sr. Díaz Torres.***

3.9. Como resultado de esa aclaración, el Sr. Díaz Torres solicitó copia de la lista de puentes vulnerables a socavación. Sin embargo, el ingeniero Coll expresó reparos a compartir dicha lista, dado que temía que la prensa no supiera utilizar el documento o lo malinterpretara. Pese a ello, al final de la reunión se acordó que el CPI solicitaría esos documentos a la Sa. Rosario. *Véase **Declaración Jurada del Sr. Díaz Torres.***

3.10. El Sr. Díaz Torres solicitó los antes mencionados documentos a la Sa. Rosario en la noche del 12 de septiembre de 2019. **Anejo 2.**

3.11. El 18 de septiembre de 2019, el Sr. Díaz Torres escribió un mensaje a la Sa. Rosario dando seguimiento a la solicitud que le fue cursada el 12 de septiembre de 2019. Sin embargo, la Sa. Rosario respondió, indicando que ya no trabajaba para el DTOP y la ACT, e informando que la persona encargada de prensa ahora era Juan José Díaz. **Anejos 3. Véase **Declaración Jurada del Sr. Díaz Torres.****

3.12. El 19 de septiembre de 2019, el Sr. Díaz Torres le escribió al Sr. Juan José Díaz dando seguimiento a la solicitud cursada previamente a la Sa. Rosario. **Anejos 4.**

3.13. El Sr. Juan José Díaz respondió a la comunicación del Sr. Díaz Torres confirmando su recibo, informando que daría seguimiento con los ingenieros y expresando que, si el documento existía, lo estaría compartiendo. **Anejo 5.**

3.14. El 26 de septiembre de 2019, el Sr. Díaz Torres escribió nuevamente al Sr. Juan José Díaz dando seguimiento a la solicitud de información. **Anejo 6.**

3.15. El Sr. Juan José Díaz respondió indicando que había estado ocupado, pero que estaría refiriendo la petición al Sr. Coll, quien anteriormente había expresado reparos con compartir la lista de puentes vulnerables a socavación.

**Anejo 7.**

3.16. El 11 de octubre de 2019, el Sr. Díaz Torres tuvo la oportunidad de entrevistar a la Ing. Rosana Aguilar Zapata, Directora Ejecutiva de la ACT. En la entrevista estuvieron presentes, además, el Sr. Juan José Díaz y el Ing. Ariel Pérez, Consultor de la ACT. *Véase Declaración Jurada del Sr. Díaz Torres.*

3.17. Durante la entrevista, el Sr. Díaz Torres solicitó nuevamente la lista de puentes susceptibles a socavación, pero los presentes se negaron a proveerla. *Véase Declaración Jurada del Sr. Díaz Torres.*

3.18. El 29 de octubre de 2019, el CPI publicó una noticia, de la autoría del Sr. Díaz Torres, en la que, entre otras cosas, documentó la negativa de la ACT a entregar la lista de puentes susceptibles a socavación. Rafael R. Díaz Torres, *A lo adivino el manejo de los puentes en Puerto Rico*, CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO (29 de octubre de 2019), disponible en <http://periodismoinvestigativo.com/2019/10/a-lo-advino-el-manejo-de-los-puentes-en-puerto-rico/> (última visita el 30 de enero de 2020).

3.19. El 11 de diciembre de 2019, el Sr. Díaz Torres solicitó al Sr. Juan José Díaz la lista de los puentes que hayan sido reabiertos luego de que fueran destruidos por el huracán María en septiembre de 2017. También se pide conocer los que quedaban pendiente de reapertura. **Anejo 8.**

3.20. El Sr. Díaz Torres nunca recibió una respuesta a esta solicitud. *Véase Declaración Jurada del Sr. Díaz Torres.*

3.21. El 13 de diciembre de 2019, el Sr. Díaz Torres solicitó en persona a la Ing. Aguilar Zapata la referida lista de puentes reabiertos durante la ceremonia de apertura del puente en la comunidad de Tropical Beach, en Naguabo. Ante esa solicitud, el Sr. Alex Castro, Oficial de Prensa del DTOP, interviene e indica que el Sr. Díaz Torres debía cursarle un mensaje solicitando esa

información, pese a que ya así se le había enviado previamente al Sr. Juan José Díaz. Véase **Declaración Jurada del Sr. Díaz Torres**.

3.22. El 16 de diciembre de 2019, el Sr. Díaz Torres envió el mensaje de texto requerido por el Sr. Castro, solicitando –nuevamente– la lista de los puentes que hayan sido reabiertos luego de que fueran destruidos por el huracán María en septiembre de 2017 y la de los que quedaban pendiente de reapertura. Véase **Declaración Jurada del Sr. Díaz Torres**.

3.23. Ni el Sr. Castro, ni el Sr. Juan José Díaz, ni alguien en la ACT o el DTOP respondieron a la solicitud del Sr. Díaz Torres. Véase **Declaración Jurada del Sr. Díaz Torres**.

3.24. Nadie en la ACT y el DTOP ha hecho entrega de la información solicitada. Véase **Declaración Jurada del Sr. Díaz Torres**.

3.25. Las partes contra las cuales se dirige el presente recurso de *mandamus* tienen el deber ministerial de entregar la información solicitada.

3.26. Los documentos, materiales e información solicitados por el CPI son originados, conservados y/o recibidos por una dependencia del ELA. Por lo tanto, son documentos y materiales públicos, a los cuales cualquier ciudadano puede tener acceso u obtener una copia si así lo solicita.

3.27. Toda la información solicitada es información pública y de alto interés público para el Pueblo de Puerto Rico.

3.28. La información solicitada por el CPI no está protegida de forma alguna por confidencialidad o privilegio alguno; tampoco está cobijada bajo alguna de las excepciones al derecho de acceso a la información.

3.29. El CPI ha agotado todos los remedios administrativos disponibles para obtener la información solicitada sin obtener resultados positivos, y ha cumplido con el deber de hacer un requerimiento previo a la parte promovida.

3.30. No existe otro remedio adecuado y eficaz en ley para que el CPI pueda obtener la información solicitada por lo que es necesario que se expida el presente recurso de *mandamus* para la obtención de dicha información.

- 3.31. Las actuaciones y omisiones de la parte promovida al negarse a proveer o poner a disposición del peticionario la información pública solicitada laceran el derecho de este último al acceso a la información.
- 3.32. Los derechos invocados por el CPI en el presente recurso surgen exclusivamente al amparo de la Constitución y las leyes del ELA.

#### IV. CAUSAS DE ACCIÓN

##### *A. Primera causa de acción – Mandamus*

4.1. El CPI acoge, adopta por referencia y hace formar parte de la presente causa de acción todos los hechos alegados en los párrafos 1.1 al 3.32 de la presente petición.

4.2. El Art. 649 del Código de Enjuiciamiento Civil define el auto de *mandamus* como:

[U]n auto altamente privilegiado dictado por el Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado, o por el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, a nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y dirigido a alguna persona o personas naturales, a una corporación o a un tribunal judicial de inferior categoría dentro de su jurisdicción requiriéndoles para el cumplimiento de algún acto que en dicho auto se exprese y que esté dentro de sus atribuciones o deberes. Dicho auto no confiere nueva autoridad y la parte a quien obliga deberá tener la facultad de poder cumplirlo.

32 LPRA § 3421 (2018). Véase también Regla 54 de las de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V, R. 54 (2018); AMPR v. Srio. Educación, 178 DPR 253 (2010);

Báez Galib v. CEE II, 152 DPR 382, 391-94 (2000); Noriega v. Hernández

Colón, 135 DPR 406, 447-48 (1994).

4.3. Por su parte, el Artículo 650 del mismo cuerpo normativo establece lo siguiente:

El auto de *mandamus* podrá dictarse por el Tribunal Supremo o por el Tribunal de Primera Instancia o por cualquiera de sus magistrados o jueces cuando se hallen en el ejercicio de sus funciones o en sus oficinas, y se dirigirá a cualquier tribunal inferior, corporación, junta o persona obligada al cumplimiento de un acto que la ley particularmente ordene como un deber resultante de un empleo, cargo o función pública; pero aun cuando puede requerir a un tribunal inferior o a cualquiera de sus jueces para que adopte este criterio o para que proceda al desempeño de cualquiera de sus funciones, el auto no puede tener dominio sobre la discreción judicial.

32 LPRA § 3422 (2018).

- 4.4. De conformidad con lo anterior, el recurso solamente procede cuando el peticionario logra demostrar el incumplimiento de un deber ministerial de determinado funcionario público. Noriega, 135 DPR en la pág. 448. Véase también AMPR, 178 DPR en las págs. 263-64; Díaz Saldaña v. Acevedo Vilá, 168 DPR 359, 365 (2006) (Sentencia). Véase además DAVID RIVÉ RIVERA, RECURSOS EXTRAORDINARIOS 107 (2da ed. rev. 1996).
- 4.5. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, un deber ministerial es “un deber impuesto por la ley que no permite discreción en su ejercicio, sino que es mandatorio o imperativo”. Pagán v. Tower, 35 DPR 1, 3 (1926). Véase también AMPR, 178 DPR en las págs. 263-64; Díaz Saldaña, 168 DPR en la pág. 365; Álvarez de Choudens v. Tribunal Superior, 103 DPR 235, 242 (1974); Rodríguez Carlo v. García Ramírez, 35 DPR 381, 384 (1926). Véase además RIVÉ RIVERA, *supra*, en la pág. 107.
- 4.6. No obstante, el Tribunal ha señalado que el “deber ministerial, aunque inmanente al auto de *mandamus*, no tiene que ser necesariamente expreso, pues tal supuesto reduciría la función exclusiva de este Tribunal de interpretar la Constitución y las leyes”. AMPR, 178 DPR en la pág. 264 (citando a Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 418 (1982)).
- 4.7. Igualmente, el deber ministerial no tiene que surgir formalmente de una ley, pudiendo éste ser imperativo de la Constitución, un reglamento, o cualquier otro documento normativo, abarcando cualquier fuente que tenga fuerza de ley y que obligue al funcionario en cuestión a realizar determinado acto.
- 4.8. Por otra parte, la doctrina impone ciertas limitaciones respecto a la expedición del auto de *mandamus*. De tal manera, éste no puede ser emitido “en los casos en que se encuentre un recurso adecuado y eficaz en el curso ordinario de la ley”. Art. 651, Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA § 3423 (2018); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407 (1982). Es decir, el auto de *mandamus* sólo procede cuando “el derecho a exigir la inmediata ejecución de un acto sea evidente y aparezca que no se podrá dar ninguna excusa para no ejecutarlo”. Regla 54 Proc. Civ., 32 LPRA Ap. V., R. 54 (2018).



- 4.9. De igual forma, se ha reconocido que debe existir un requerimiento previo por parte del peticionario hacia el demandado para que éste cumpla con el deber exigido, salvo algunas excepciones. AMPR, 178 DPR en la pág. 267.
- 4.10. Finalmente, el Tribunal Supremo ha establecido que para expedir un recurso de *mandamus* es menester atender si se plantean cuestiones de gran interés público y la controversia levantada requiere una pronta y rápida solución; y si el peticionario tiene un interés especial en el derecho que reclama, distinto al que pueda tener cualquier otro ciudadano. Dávila v. Superintendente Elecciones, 82 DPR 264, 274-75 (1960); Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 DPR 443 (2006).
- 4.11. Por otra parte, el acceso a la información ha sido reconocido en Puerto Rico como un derecho humano y constitucional de rango fundamental. Bhatia Gautier v. Rosselló Nevares, 199 DPR 59, 80 (2017); Trans Ad PR v. Junta Subastas, 174 DPR 56, 67 (2008); Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, 170 DPR 582, 590 (2007); Ortiz v. Dir. Adm. Tribunales, 152 DPR 161, 175 (2000); Soto v. Srio. Justicia, 112 DPR 477 (1982).
- 4.12. Dicho derecho emana de los derechos de libertad de expresión, prensa y asociación expresamente dispuestos en la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. CONST. ELA, Art. II, § 4; Bhatia Gautier, 199 DPR en la pág. 80; Trans Ad PR, 174 DPR en la pág. 67; Nieves v. Junta, 160 DPR 97, 102 (2003); Ortiz, 152 DPR en la pág. 175; Soto v. Srio. Justicia, 112 DPR 477, 485 (1982).
- 4.13. El derecho de acceso a la información pública es también reconocido en varios tratados internacionales como un derecho humano fundamental, que “posee un carácter facilitador del ejercicio de otros derechos humanos, es decir, el acceso a la información es, en muchos casos, imprescindible para que las personas puedan hacer efectivos otros derechos”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Acceso a la información, violencia contra las mujeres y la administración de la justicia en las Américas* (27 de

marzo de 2015), en <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/acceso-informacion.pdf> (última visita el 30 de enero de 2020).

4.14. Tanto la Declaración Americana en su art. IV (“Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”), como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 19 (“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”), generan obligaciones para Estados Unidos y sus territorios, exigiendo que la gestión estatal del gobierno de Puerto Rico se rija por “los principios de máxima divulgación y buena fe”. Com. Interamericana Derechos Humanos, *El Derecho de Acceso a la Información en el marco jurídico Interamericano* (2da ed., 2011), en <https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/acceso%20a%20la%20informacion%202012%202da%20edicion.pdf> (última visita el 30 de enero de 2020).

4.15. De igual forma, los principios 2 al 4 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la CIDH, reconocen la naturaleza fundamental del derecho de acceso a la información, e imponen a los Estados y sus territorios una obligación de máxima divulgación, que “sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”. *Principios sobre Libertad de Expresión*, <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosLE.asp> (última visita el 30 de enero de 2020).

4.16. Además, la CIDH ha reiterado que el derecho de acceso a la información es una “herramienta legal para alcanzar la transparencia de los actos del Estado así también como medio de fiscalización y participación efectiva de todos los sectores de la sociedad sin discriminación”. CIDH, *Acceso a la información*,

*violencia contra las mujeres y la administración de la justicia en las Américas, supra*, en la pág. 27.

4.17. Además, el derecho de acceso a la información encuentra su justificación en los supuestos básicos de la vida en sociedades democráticas. Colón Cabrera, 170 DPR en la pág. 590 (“[E]l acceso a la información constituye un componente importante de una sociedad democrática, en donde el ciudadano puede emitir un juicio informado sobre las actuaciones del Gobierno”.); Bhatia Gautier, 199 DPR en la pág. 80 (“El acceso a la información pública constituye un pilar fundamental en toda sociedad democrática”). Después de todo, “[s]in conocimiento de hechos no se puede juzgar; tampoco se puede exigir remedios a los agravios gubernamentales mediante los procedimientos judiciales o a través del proceso de las urnas cada cuatro (4) años”. Soto, 112 DPR en la pág. 485. Véase también Bhatia Gautier, 199 DPR en las págs. 80-81.

4.18. Visto de esta manera, el derecho al acceso a la información sirve de garante de todo régimen que se hace llamar democrático. En palabras del profesor Efrén Rivera Ramos:

Cualquiera que sea la definición que adscribamos al concepto “democracia”, su principio cardinal es que el poder político ha de residir en el pueblo y que los gobernantes ejercen sus funciones para el pueblo y por mandato de éste. Mal podría gobernarse a sí mismo un pueblo que estuviere ajeno a cuando sucede en la conducción de sus asuntos.

Efrén Rivera Ramos, *La libertad de información: Necesidad de su reglamentación en Puerto Rico*, 44 REV. JUR. UPR 67, 69 (1975). Véase también Luis F. Estrella Martínez, *La libertad de información como elemento necesario para el Acceso a la Justicia*, 55 REV. DER. PR 23 (2016); Carlos Ramos Hernández, *Acceso a la información, transparencia y participación política*, 85 REV. JUR. UPR 1015 (2016); Érika Fontánez Torres, *El derecho a participar: Normas, estudios de caso y notas para una concreción*, 68 REV. JUR. COL. ABOG. PR 631, 656-57 (2007); Luis Villanueva Nieves, *Sobre el derecho a saber y la obligación de revelar*, 37 REV. JUR. U. INTER PR 217 (2003).

4.19. Dada la importancia de este derecho, “[e]l Estado . . . no puede negar caprichosamente y sin justificación aparente la información recopilada en su gestión pública”. Soto, 112 DPR en la pág. 489; Colón Cabrera, 170 DPR en la pág. 590; Santiago v. Bobb y El Mundo, 117 DPR 153, 158 (1986). Ello se debe a que “al recibir del Pueblo soberano la función de gobernar, el Estado no quedó en libertad de decidir cuáles papeles y documentos resultantes de su gestión pública estarían fuera de; escrutinio de quienes son, en esencia, la fuente misma de la soberanía”. Soto, 112 DPR en la pág. 489.

4.20. Además, en la tarea de garantizar este derecho, “la prensa constituye ‘un vehículo de información y opinión [para] informar y educar al público, ofrecer críticas, proveer un foro para la discusión y el debate, y actuar como sustituto para obtener noticias e información para sus lectores, que por sí y como individuos no pueden o desean recopilarla’”. Santiago, 117 DPR en la pág. 159.

4.21. Por otra parte, el derecho al acceso a la información, en su modalidad de acceso a documentos públicos, encuentra reconocimiento estatutario en el Artículo 409 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA § 1781 (2018), el cual establece, que “[t]odo ciudadano tiene derecho a inspeccionar y sacar copia de cualquier documento público de Puerto Rico, salvo lo expresamente dispuesto en contrario por la ley”. *Id.*

4.22. Igualmente, la Ley de transparencia y procedimiento expedito para el acceso a la información pública, Ley Núm. 141-2019, establece como política pública, lo siguiente:

1. La información y documentación que produce el gobierno se presume pública y accesible a todas las personas por igual.
2. La información y documentación que produce el gobierno en sus estudios, transacciones y en el ejercicio de la autoridad pública, de manera directa o delegada, son patrimonio y memoria del pueblo de Puerto Rico.
3. El derecho constitucional de acceso a la información requiere la transparencia gubernamental.
4. Toda información o documento que se origine, conserve o reciba en cualquier dependencia del Gobierno, aunque se encuentre bajo la custodia de un tercero, se presume público y debe estar accesible al Pueblo y la prensa.

5. El derecho de acceso a la información pública es un pilar constitucional y un derecho humano fundamental.
6. El acceso a la documentación e información pública tiene que ser ágil, económico y expedito.
7. Toda persona tiene derecho a obtener la información y documentación pública, sujeto a las normas y excepciones aplicables.
8. El Gobierno de Puerto Rico establece en la presente Ley una política de apertura a la información y documentación, que incluya la disponibilidad de la tecnología y de los avances necesarios para hacer valer el derecho de los solicitantes a acceder a la información y documentación pública de forma oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles, inalterados e íntegros.

Art. 3, Ley Núm. 141-2019.

4.23. A su vez, la frase ‘documento público’ es definido en la Ley de administración de documentos públicos de Puerto Rico como

[T]odo documento que se origine, conserve o reciba en cualquier dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con la ley o en relación con el manejo de los asuntos públicos y que de conformidad con lo dispuesto en la sec. 1002 de este título se haga conservar [o] que se requiera conservar permanentemente o temporalmente como prueba de las transacciones o por su valor legal. Incluye aquellos producidos de forma electrónica que cumplan con los requisitos establecidos por las leyes y reglamentos.

3 LPRA § 1001 (2018).

4.24. Ahora bien, pese a la naturaleza fundamental del derecho al acceso a la información, el mismo no es un derecho absoluto, “sino que pueden existir intereses apremiantes del estado que justifiquen un reclamo de confidencialidad de su parte”. Trans Ad de PR, 174 DPR en la pág. 68; Angueira v. JLBP, 150 DPR 10, 24 (2000); Soto, 112 DPR en la pág. 493. *Véase también* Bhatia Gautier, 199 DPR en la pág. 82.

4.25. Así, y ante la ausencia de una legislación que viabilice el acceso a la información gubernamental, el Tribunal Supremo ha señalado que el Estado puede invocar la confidencialidad de información cuando: “(1) una ley así lo declara; (2) la comunicación está protegida por alguno de los privilegios evidenciarios que pueden invocar los ciudadanos; (3) revelar la información puede lesionar derechos fundamentales de terceros; (4) se trate de la identidad de un confidente, y (5) sea ‘información oficial’ conforme a la Regla 514 de Evidencia”. Bhatia Gautier, 199 DPR en la pág. 83. *Véase también*

Trans Ad PR, 174 DPR en la pág. 68; Colón Cabrera, 170 DPR en la pág. 590; Angueira, 150 DPR en la pág. 24; Santiago, 117 DPR en la pág. 159.

4.26. Sin embargo, en estos casos, “[e]l Estado tiene la carga de probar que satisface cualquiera de las excepciones antes enumeradas”, Bhatia Gautier, 199 DPR en la pág. 83; Colón Cabrera, 170 DPR en la pág. 590; Angueira, 150 DPR en la pág. 24; Santiago, 117 DPR en la pág. 159, y los tribunales deben examinar tales reclamos de confidencialidad con suma cautela. Santiago, 117 DPR en la pág. 159.

4.27. Por último, la mera invocación de una ley como fundamento para restringir el acceso a la información no es suficiente para avalar la existencia de una de las excepciones a dicho derecho. Por el contrario,

[T]oda ley que pretenda ocultar información a un ciudadano bajo el palio de la confidencialidad tiene que justificarse a plenitud. Ello se satisface si la legislación: (1) cae dentro del poder constitucional del Gobierno; (2) propulsa un interés gubernamental importante o sustancial; (3) el interés gubernamental no está relacionado con la supresión de la libre expresión, y (4) la restricción concomitante del derecho a la libre expresión no es mayor que la esencial para impulsar dicho interés.

Colón Cabrera, 170 DPR en la pág. 592-93.

4.28. De hecho, en Bhatia Gautier, el Tribunal Supremo aclaró que “las restricciones impuestas por el aparato gubernamental [al acceso a la información] deben responder a un interés apremiante del Estado”. Bhatia Gautier, Bhatia Gautier, 199 DPR en la pág. 82.

4.29. En este caso procede el recurso de *mandamus* a tenor con la normativa prevaleciente, en vista de lo cual procede que se ordene a las partes promovidas a proveer la información que ha sido solicitada.

## V. SÚPLICA

**EN MÉRITO DE LO ANTERIOR**, se solicita a este Tribunal que tome conocimiento de lo antes expuesto, declare **HA LUGAR** la presente petición y, en consecuencia, ordene a la parte promovida a cumplir inmediatamente con su deber ministerial en este caso, particularmente proveer la siguiente información solicitada:

a. La lista de puentes vulnerables a socavación.

- b. La lista de los puentes que hayan sido reabiertos luego de que fueran destruidos por el huracán María en septiembre de 2017.
- c. La lista de puentes destruidos por el huracán María en septiembre de 2017 que quedan pendiente de reapertura.

Por último, se solicita de este Tribunal la imposición del pago de las costas y los gastos de litigio, así como cualquier otro remedio que proceda en derecho.

**SOMETIDO.**

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2020.

**(f) Luis José Torres Asencio**

Colegiado Núm. 17087

TS Núm. 15610

Profesor

Clínica de Asistencia Legal

Facultad de Derecho UIPR

PO Box 368038

San Juan, PR 00936-8038

Tel. (787) 209-6375; Fax: N/A

C/E: luis.jose.torres.asencio@gmail.com

**(f) Steven P. Lausell Recurt**

Colegiado Núm. 17958

TS Núm. 16644

Profesor

Clínica de Asistencia Legal

Facultad de Derecho UIPR

PO Box 194735

San Juan, PR 00919-4735

T. 787-751-1600; F. 787-751-1867

C/E: slausell@gmail.com

Se presenta libre de derechos por la parte peticionaria estar representado por la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 4 LPRA § 303a (2018).